

El agro en el Estado comunitario: más de lo mismo

2

ÉDGAR NOVOA*



Introducción

En las últimas décadas hemos estado asistiendo a una profunda transformación de lo que hemos conocido hasta ahora como el campo –lo que para las políticas públicas se conoce como el agro–. El país sigue siendo particularmente agrario, en el sentido de que hoy la economía tiene una particular dependencia de las exportaciones de productos primarios (café, banano, flores, palma africana, metales preciosos y petróleo, etc.), para buscar un equilibrio en sus agregados macroeconómicos. Sin embargo, queremos seguir viendo ese campo como algo lejano, un lugar bucólico verde, lleno de pajaritos, animales y bichos raros al cual vamos de paseo, o de vacaciones, para descansar del estrés que nos produce el ritmo de las ciudades. Otra imagen que nos recuerda el campo actual es la del desplazado, un ser molesto que lo único que sabe hacer es “afear” las calles con su presencia y pedir limosna. En el mejor de los casos, el campo es el escenario de los enfrentamientos de los actores armados (fuerzas armadas, guerrilleros y paramilitares), que se disputan su control. El refinamiento tecnocrático de los gobiernos ha convertido el campo en un lugar indiferenciado y homogéneo, una inmensa dotación de recursos susceptible de comercializarse en el mercado externo, para el beneficio de la nación. Es paradójico, pero en todas esas imágenes lo que falta, efectivamente, es el mismo campo y sus habitantes.

* Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Abogado, magister en Desarrollo Regional, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).



El campo, como la constitución de nuestra nación, ha sufrido una larga historia de discursos y prácticas basadas en el olvido y la exclusión. Desde que existe la memoria de las cifras macroeconómicas, el campo estaba ahí contribuyendo de diversas maneras a dinamizar la economía nacional. Hoy, después de haber transitado por el auge y decaimiento de un precario proceso de industrialización, el campo sigue ahí contribuyendo como uno de los sectores más importantes de la economía nacional, proporcionando la dieta diaria de millones de colombianos ciudadanos y entregando lo mejor de su fuerza de trabajo a los empleos precarios y mal remunerados de las ciudades. Las modernizaciones del campo se han escrito con las páginas más sangrientas de la historia nacional, desde los inicios de la expansión de la frontera agrícola, iniciada en la segunda mitad del siglo XIX, hasta el día de hoy, y es una historia llena de migraciones, violencia y despojos, un círculo mortal que se repite con nuevos actores y escenarios.

Actualmente vivimos una más de esas modernizaciones en un escenario global, lo que implica una síntesis particular entre actores, intereses y proyectos transnacionales; un conjunto de fuerzas que desborda ampliamente el marco nacional y las dinámicas, actores y propuestas localizadas, a lo largo y ancho de nuestra geografía y en medio de un conflicto armado alimentado por los dineros del negocio transnacional de las drogas ilícitas en sus diversas cadenas (siembra, transformación-producción, exportación y venta). En el medio está un Estado cada vez más desnacionalizado por el auge de una lógica de mercado total, que impone su proyecto utilizando los intereses y necesidades de las grandes empresas transnacionales, las imposiciones de la banca multilateral y su vehículo más eficiente, el dinero. Esta lógica de mercado total demanda un principio básico de desregulación, lo que implica el decaimiento del concepto de soberanía nacional, producido a lo largo de toda la modernidad, que deja al Estado como un agente en competencia con los demás Estados por las inversiones que dinamizarán el crecimiento nacional y, de paso, se hacen más pronunciados sus rasgos de dominación y mando para imponer el nuevo proyecto.

Es urgente y necesario entender el nuevo escenario "glocal" en el cual se plantean los nuevos derroteros de la política agraria y se juegan los proyectos sociales y políticos alternativos. El espacio de la protesta social y política de los sectores sociales populares debe asumir en el actual escenario, de manera simultánea, la protesta y la propuesta. Hay que seguir exigiendo respuestas de solución a las múltiples necesidades acumuladas durante años; a las que hay



que sumar los efectos más regresivos del actual proceso de internacionalización de la economía y de degradación del conflicto armado interno, sin dejar de lado los posibles caminos o alternativas de solución.

El presente texto plantea un esbozo de interpretación y análisis que busca contribuir en ese camino de protesta-propuesta. En un primer apartado se presenta una caracterización de las tendencias contemporáneas de transformación global, para ubicar el contexto en el cual nos encontramos. En una segunda parte se miran las tendencias de configuración interna del régimen político colombiano y se enfatiza en los rasgos más protuberantes del actual régimen. El tercer apartado se acerca a una caracterización general de la política agraria en el esquema de seguridad democrática del actual Gobierno. En la última sección se busca revalorizar las prácticas y propuestas que los sectores sociales campesinos vienen desarrollando como alternativa al modelo neoliberal imperante en las políticas públicas.

Crisis, reestructuración, y más allá...

Los múltiples desplazamientos y transformaciones socio-geo-históricas que se han venido presentando en las últimas décadas tienen un punto de referencia esencial en la diversidad de luchas sociales y políticas que tuvieron una expresión importante a finales de los años sesenta en Europa y Estados Unidos, así como en la multiplicidad de confrontaciones contra la imposición de formas de desarrollo en toda la geografía del sur. Los veranos calientes europeos –Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Noruega– y el norteamericano son más conocidos que la diversidad de luchas y confrontaciones contra el discurso desarrollista –en campos y ciudades– que se libraron en toda la geografía del sur y que también contribuyeron de manera importante a la aceleración de la crisis y la reestructuración capitalista.

Lo que se ha denominado *la crisis*, desde los años setenta, y sus variadas manifestaciones hasta hoy, es la consideración de un momento de desequilibrio, disrupción o descompensación que evidencia claramente la existencia de conflictos, antagonismos o contradicciones que deben ser resueltos o subsanados, para recobrar el equilibrio perdido o alcanzar uno nuevo. Aun en los análisis más críticos o alternativos de la crisis, la visión "médica" ha sido de uso común, "el momento decisivo de una enfermedad, en el cual se decide si los poderes de curación del organismo son o no suficientes para la recuperación"



(O'Connors, 1987: 108). La "crisiología" desarrollada desde la izquierda tiene una raíz bastante dialéctico-negativa. Mira toda alternativa como destrucción de la totalidad vigente y opuesta como única posibilidad, o se define como proyecto por la intervención permanente y sistemática en las contradicciones objetivas del desenvolvimiento sistémico, para generar la ruptura final. Estas alternativas olvidan totalmente el carácter constitutivo-transformador que posee la acción social, fuente de la misma crisis, y enfatizan la tendencia objetiva del sistema al colapso final, a la catástrofe. Es necesario y urgente reconocer la dialéctica crisis-desarrollo que se encuentra en el desenvolvimiento espacio-temporal del capital en el que las luchas sociales están inmersas y, al mismo tiempo, enfatizar los elementos constitutivos de la misma acción social.

La crisis se define como el producto de la iniciativa capitalista frente al aumento cuantitativo o cualitativo de las luchas obreras. La iniciativa capitalista que tiende a des-estructurar, a descomponer, los niveles de luchas organizadas, así como lo que denominamos, en italiano, la "composición política" de la clase obrera y del proletariado, opera a través de la crisis sobre los niveles estructurales del proceso de trabajo y de reproducción sociales de los factores de capital [...] la crisis está relacionada orgánicamente con el movimiento del capital que ha llegado a su estado de madurez, que tanto desarrollo como crisis están a la misma altura de los elementos del ciclo capitalista y que su alternancia es simplemente una cuestión de poder para el capital (Negri, 1978: 14).

La violencia con que se viene imponiendo la reestructuración neoliberal efectuada tanto en el norte como en el sur, e iniciada en los Gobiernos de la Thatcher y Reagan, nos habla de la capacidad de desestructuración del orden lograda por las luchas sociales en su momento. Son las múltiples acciones desde el trabajo, así como las diversas fuerzas que luchan contra la unidad del poder, las que presionan sobre las tendencias de la ganancia obligando a su reorganización. Dichas fuerzas son las que desplazan y obligan al accionar de los mecanismos políticos del capital; son esas mismas fuerzas las que lo desnudan políticamente, obligándolo a presentarse como lo que es, mando y dominación.

El ciclo crisis-reestructuración, que expresa la lógica capitalista, implica la necesidad del capital por preservar las relaciones sociales de explotación y dominio, en la búsqueda por rehacer el equilibrio perdido y produciendo unas nuevas condiciones y mecanismos para prolongar su permanencia. Esa dialéctica propia del desenvolvimiento capitalista evidencia los rasgos cada vez más



despóticos del capital para lograr su vigencia y, aunque revelan la creciente precariedad de la relación social capitalista, sigue siendo efectiva para lograr su propósito esencial: la prolongación del dominio sobre la relación social capitalista, en las actuales circunstancias de socialización de la producción sobre el conjunto de la sociedad. De la misma manera, la dialéctica crisis-reestructuración plantea la importancia estratégica que juega la acción social en la producción de la crisis y, más allá de la crisis, en las posibilidades de cambio y emancipación social.

Hacia la segunda mitad de la década de los setenta del siglo pasado se inicia un proceso de reestructuración en todas las dimensiones socio-históricas y escalas geográficas. La crisis se inicia con el anuncio de la devaluación del dólar en 1971, lo que marcó el fin del Bretton Woods, una pieza central en la reconstrucción del orden después de la segunda guerra mundial¹. Aparecen en el panorama los cambios en la formas de producción y gestión del trabajo. Se inicia una lucha frontal contra los mecanismos de intervención del Estado, una transformación de sus formas de gestión político-administrativa y los canales de participación política y social. El proyecto neoliberal, basado en la lógica del mercado y la fluidez del dinero, se va imponiendo en toda la geografía mundial. La clase obrera fabril sufre una derrota histórica frente a la reestructuración capitalista. En los últimos años la acción social viene recomponiéndose, con una gran diversidad de actores, demandas, proyectos y lugares de confrontación.

En América Latina, desde la década de los años ochenta y en los países llamados del socialismo real durante los noventa, después de la caída del muro de Berlín, se inician profundos cambios de reconversión productiva y reforma política. Con la crisis de la deuda externa en América Latina, en 1982, se impusieron en el continente las políticas de estabilización macroeconómica y los ajustes estructurales. Se reorientó el modelo de desarrollo hacia la promoción de exportaciones y la incesante búsqueda de la inversión extranjera directa. En el nivel político-institucional se gestionó una amplia reforma del Estado, con la

¹ Las regulaciones monetarias del Bretton Woods estipulan un patrón combinado de regulación monetaria internacional oro-dólar, se elimina el respaldo de la convertibilidad en oro del dólar y se deja a los países la libre decisión de establecer el sistema cambiario que a bien tuvieran elegir, o sea flotación, ajustes graduales, tipo de cambio fijo y flotación conjunta con otras monedas.



privatización de las empresas industriales, comerciales y prestadoras de servicios, se consolidó una reforma a la estructura político-administrativa territorial de la gestión pública y se desregularon o re-regularon los mercados más importantes (laboral, financiero, comercial), para vincular estrechamente las economías nacionales al mercado mundial. Los países socialistas van a verse envueltos en un proceso de reorganización productiva y reforma política durante los años noventa, bajo la tutela de la banca multilateral (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional). Con la crisis-reestructuración de las economías centrales, algunas economías periféricas logran avances considerables (sudeste asiático, India, Brasil, México). La economía mundial sufre bastantes transformaciones; se inicia un proceso de integración por acuerdos bilaterales y multilaterales, que conduce a la integración de bloques en todos los continentes, siendo el de la Unión Europea el proceso más avanzado. Se consolida una integración económica internacional alrededor del mercado mundial con el creciente proceso de intercambios financieros y comerciales.

En el centro de la globalización capitalista

En la base de la reestructuración que se viene presentando hemos venido asistiendo a una discontinuidad profunda de la economía política del desenvolvimiento capitalista que se manifiesta en una extensión intensiva de la lógica del valor, la *financiarización* de la economía y el desarrollo, uso y aplicación de la tecno-ciencia como la fuerza productiva más importante. Por diversas vías, las relaciones productivas encerradas en los muros de la fábrica, la oficina o los grandes proyectos de extracción mineros y petroleros o de producción agropecuaria se han venido transformando profundamente, después de la derrota histórica sufrida por los obreros fabriles por la imposición del proceso de reestructuración capitalista, en los años setenta y ochenta.

La creciente socialización de la producción implica que la sociedad, en su conjunto, está sujeta a las relaciones capitalistas; el creciente proceso de abstracción del trabajo se ha convertido en una realidad; ya no es posible pensar en la suma de una serie de trabajos aislados, sino que el trabajo social es el presupuesto básico de toda producción². No hay una equivalencia clara-

² "La nivelación del trabajo a trabajo abstracto, genérico, tiene como corolario la continuada existencia de la forma valor, del dominio capitalista, de la extensión de la



mente cuantificable entre fuerza trabajo y el plusvalor extraído; esta relación no está basada en una proporción medible, en una proporción fija, lo que hace que se convierta en una relación sobre la base de la violencia del dominio y el mando propio de la empresa, o el uso de la crisis permanente. Nos encontramos en la "fábrica difusa"; es la prolongación del dominio fabril sobre toda la sociedad de manera intensiva y extensiva; es la reducción de todas las relaciones sociales a puro valor de cambio, lo que en la vida cotidiana se vive como la mercantilización total. Se deshicieron las diferencias existentes entre producción y reproducción. De hecho, la reproducción es motivo y parte de la producción. Las relaciones entre el espacio de vida y el espacio de producción se hacen difíciles de establecer y la relación entre lo íntimo, lo privado y lo público manifiesta múltiples transformaciones. Los muros de las fábricas se han transparentado, el mercado ha entrado en la fábrica, con la ayuda de las nuevas tecnologías y la velocidad y fluidez del dinero, transformando las formas de producción, la gestión del trabajo, la distribución y el consumo.

La tecno-ciencia permite una gran flexibilidad y velocidad al proceso de valorización en términos de su desplazamiento –deslocalización-descentralización-desconcentración–, así como una alta flexibilidad en las posibilidades de producción y reconversión productiva atendiendo a las señales del mercado. La misma tecno-ciencia aplicada al proceso productivo contribuye a la ruptura de la relación cuantificable entre fuerza de trabajo y plusvalor, pues las máquinas producen valor; de esta forma se exageran los rasgos despóticos de la relación social, lo que conduce a una radical transformación de la forma y funciones del Estado:

Los instrumentos coercitivos serán multiplicados para asegurar que se obtengan beneficios equivalentes a aquellos que esta utopía de mercado ofrece. La contrarrevolución del empresario capitalista sólo

de la fábrica a la sociedad entera. Desde este punto de vista, la empresa –vista como una fábrica global– es hoy el concepto clave para el capital, producido por los patrones como un concepto que se adecúa a sus necesidades en la fase específica de las relaciones de clase que vivimos en el presente. La combinación de fluidificación del trabajo todo a lo largo del ciclo productivo y la selectividad en las funciones de control y dirección dentro del ciclo –y de allí la importancia de la automatización– ha alcanzado el nivel de un punto de ruptura histórico en el desarrollo capitalista, comparable a aquel del Taylorismo y del Fordismo" (Negri, 2002: 96).



puede operar estrictamente en el contexto de un aumento en los poderes coercitivos del Estado. La nueva ideología del *laissez-faire* de la "nueva derecha" exige como su corolario la profundización de nuevas técnicas de intervención coercitiva y estatal en toda la sociedad: o, para decirlo mejor, un incremento decisivo en la subsunción de la sociedad dentro del Estado. Esta versión "neoliberal" del "Estado-crisis" exaspera las características esenciales de la forma Estado planificador y las traduce en términos explícitamente autoritarios (Negri, 2002: 143).

La *financiarización* de la economía implica que el capital financiero se convirtió en el capital hegemónico que se impone sobre el capital productivo. El papel que cumplía la moneda como medida y como medio de cambio, en últimas como representante de la riqueza, se ha desplazado hacia una función productiva. La tendencia del dinero a constituirse en el representante material de la riqueza se ha consolidado y avanzado mucho más, puesto que el dinero adquiere un papel directamente productivo y expresa la relación de dominio capitalista hoy.

En medio de la crisis, el desplazamiento del capital productivo al capital financiero, en sus múltiples manifestaciones, ya no es como ocurría anteriormente. Es la manifestación de un desajuste entre capital productivo e improductivo, entre la industria y los bancos, fenómeno que durante la crisis se expresaba en la transferencia de capital productivo hacia capital financiero, para, después de la recuperación de los niveles de ganancia, retornar al capital productivo.

La centralidad del mercado ha impuesto una relación directa entre dinero y productividad en el crecimiento económico, una relación directa entre la liberalización financiera y crecimiento económico, acumulación de capital físico, aumento de la productividad y uso eficiente de los factores. De esta forma, la *financiarización* contribuye de manera determinante a acelerar la tendencia hacia la creciente abstracción del trabajo, hacia la centralidad del trabajo social: la imposición del carácter social de la producción.

El capital financiero contribuyó directamente a cerrar la brecha entre trabajo abstracto y trabajo social y aceleró la socialización de la producción de manera intensiva y extensiva socio-geo-históricamente. El dinero se deshace paulatinamente de su función de mediación para adquirir un papel productivo, lo que deja una marca profunda sobre el desarrollo capitalista. La fluidez y velocidad impuestas por la moneda en los intercambios, el manejo de política



monetaria y la especulación financiera implican una transformación de la soberanía de los Estados nacionales. La inversión se convirtió en un motor importante para la productividad, dinamizadora del crecimiento económico. De otro lado, la hegemonía de la moneda es un elemento esencial para reorganizar la forma y funciones de los Estados. Las políticas monetarias utilizan diversos medios (financieros, crediticios, tributarios, fiscales) para buscar la lucha contra el enemigo que socaba la creciente apropiación privada de las ganancias –la inflación– e imponer la lógica del mercado total³. La política monetaria define el trazado de las políticas estatales y no como ocurrió en la época keynesiana, que era la política fiscal la que establecía el marco de las políticas económicas del Estado.

En un periodo prolongado, podemos observar un gran desempleo acompañado por cortes irreversibles en el gasto público, moviéndose en paralelo con un aumento de la financiación de la industria y una creciente concentración de los medios destinados a garantizar la circulación de bienes y el flujo de capital. Vale decir que los instrumentos keynesianos de intervención son utilizados todos a lo largo de este proceso, con el objetivo de restaurar y devolver al equilibrio el marco "natural" del mercado, las condiciones necesarias para la "espontánea" reproducción de las relaciones de ganancias y dominio (Negri, 2002: 143).

El desarrollo técnico y científico, la tecno-ciencia actual, alcanzó un alto grado de refinamiento que contribuye al desarrollo de nuevas formas de disciplina productiva y social y, de manera directa, a la hegemonía del valor de cambio en la sociedad: la constitución de la fábrica difusa. La introducción de innovaciones tecnológicas y de gestión del trabajo en el proceso productivo

³ "El tiempo de transformación del dinero en capital se ha convertido en el tiempo de transformación del dinero de la clase obrera en ingresos. Así como el tiempo de transformación del dinero en capital es cada vez más largo e incierto, la clase obrera es cada vez más capaz de imponer sus propias necesidades y reducir el tiempo en que el dinero es sacado fuera de la circulación. Cuando el dinero se bloquea para convertirse en capital, solo puede permanecer en el nivel de la simple circulación; en lugar de convertirse en capital, se convierte en 'dinero gracioso'. Es en este sentido, que la inflación no puede ser controlada, una solución para el capital no es más una solución, puesto que ella se convirtió en una 'inflación desbocada', impuesta por las luchas por el ingreso de la clase obrera" (Marazzi, 1996: 80).



siempre ha sido una de las principales fuentes de la reestructuración capitalista. Las innovaciones tecnológicas sirven simultáneamente para la producción-valorización, para la dominación y el mando del trabajo vivo y el aumento de la productividad del trabajo, así como para el ejercicio de la disciplina y el mando sobre el mismo trabajo. El antagónico desarrollo capitalista ha llevado al desarrollo y transformación de las tecnologías, revoluciones que son producto de las mismas condiciones materiales del desenvolvimiento de las contradicciones y antagonismos sociales y que, además, deben ser entendidas como revoluciones en las tecnologías. Esto no quiere decir que el conjunto de las innovaciones tecno-científicas actuales estén totalmente *funcionalizadas* en su acceso, producción y uso a la lógica capitalista, aunque hoy sea la principal fuerza productiva para el capital. "Once we can see technology as a weapon that can be used against us or by us, then we can organize our analysis of this phenomenon"⁴ (Cleaver, 1982: 3).

En las actuales circunstancias, el desarrollo de nuevos materiales y los avances en las informática, la robótica y las biotecnologías, así como sus usos y aplicaciones en la producción, distribución y consumo, han llevado a que las máquinas se conviertan en productoras de valor. De esta manera, la tecno-ciencia es la nueva fuerza productiva del capital que acelera la socialización del trabajo. Es así como la tecno-ciencia contribuyó de manera determinante en la reorganización del proceso productivo centrado en la gran fábrica y a una difusión mucho más amplia y veloz –intensiva y extensivamente–, de la socialización de la producción. La relación y distancia entre producción y realización se transforman radicalmente. Se redujo el espacio-tiempo haciendo entrar el mercado en la producción y masificó intensiva y extensivamente el consumo, por la baja en los costos de producción. La descentralización y deslocalización de la producción y el aumento de la velocidad en el proceso de valorización entre la producción y la realización en el mercado han sido posibles por uno de los mecanismos tradicionales de la reestructuración capitalista: la introducción de las innovaciones tecnológicas en el proceso productivo.

⁴ Una vez podamos definir si la tecnología puede usarse como un arma contra nosotros o ser usada por nosotros, entonces podremos organizar nuestro análisis del fenómeno (traducción de edición).



La consolidación actual de esas tendencias en el desarrollo capitalista ha producido una discontinuidad en su desenvolvimiento, lo que genera una profunda incertidumbre sobre los proyectos sociales y políticos y las interpretaciones del proceso mismo. La socialización de la producción, acelerada por el proceso de *financiarización* de la economía y la consolidación de la tecno-ciencia como la principal fuerza productiva del capital, es una realidad actual. Estamos asistiendo a una especie de nueva acumulación originaria de capital, con rasgos altamente violentos, acompañada con todos los refinamientos y capacidades intensivas y extensivas que le prestan la tecno-ciencia y la fluidez del dinero.

El actual proceso de globalización condensa y expresa esas tendencias sistémicas. Asistimos a una compresión espacio-temporal que transforma profundamente las dimensiones socio-históricas y las escalas geográficas. Se presenta una reorganización, una nueva geometría del desarrollo y la desigualdad territorial y social, en toda la extensión territorial. Fluidez, flexibilidad, competitividad, apertura, inversión, tasas de interés, son algunas de las más importantes palabras clave de las actuales transformaciones. El orden internacional se reordena. Con el fin de la Guerra Fría asistimos a una despolarización, con la tendencia hacia la constitución de un orden políticamente multipolar, lo que se corresponden con una reorganización económica altamente descentralizada-deslocalizada-desconcentrada, que se consolida a partir de áreas y regiones económicas.

Las luchas sociales y políticas retoman nuevas vías de recomposición política y social. El grito zapatista contra la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México se va a convertir en un referente esencial para las confrontaciones en el capitalismo posfordista. Las grandes concentraciones en las cumbres mundiales de los grupos de países selectos –Davos–, así como de los organismos transnacionales reguladores del mercado mundial –OMC–, implican el despliegue de novedosas estrategias de resistencia. Así mismo, la globalización de las luchas se manifestará en las diferentes reuniones internacionales de los foros sociales mundiales, que hoy buscan descentralizarse a partir de continentes y países. Mientras tanto, las luchas vuelven a hacer sentir su fuerza, y abarcan toda la extensión territorial: las demandas en contra de la privatización y por otro sentido de lo público, en el norte y en el sur; las movilizaciones contra las políticas agrarias, que con diferentes énfasis y actores se presentan en ambos hemisferios; las agendas contra los efectos más regresivos de la reestructuración neoliberal en el sur; los



movimientos de trabajadores en el Este asiático. Es así como pueden apreciarse las imágenes de París ardiendo durante días, por las luchas contra todo tipo de exclusión social, política, económica, étnica o racial. Es todo el tiempo y espacio-tiempo que hoy hace parte de los antagonismos sociales.

Si es cierto que los términos de la explotación están reubicados en el terreno social, y si, sobre este terreno ya no es posible reducir la cantidad y cualidad de la explotación, la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa al tiempo-medida de la jornada laboral "normal", entonces el sujeto proletario renace en términos antagónicos en torno a una alternativa radical, una alternativa del tiempo de la vida contra el tiempo-medida del capital (Negri, 2002: 169).

La reorganización del régimen político: neo-modernización violenta y paraestado

Los rasgos que definen el régimen político colombiano en las últimas décadas son la condensación de las tendencias generales de las relaciones capitalistas, expresadas en el proceso de globalización y los reajustes económicos, políticos y sociales internos. La consolidación de la socialización del trabajo, la *financiarización* de la economía y el advenimiento de la tercera revolución industrial, como tendencias generales de las relaciones sociales capitalistas, encuentran su manifestación más acabada en el proyecto de globalización neoliberal. Sin embargo, a pesar de la fluidez y velocidad alcanzadas por el desenvolvimiento de las relaciones capitalistas, la consistencia socio-geo-histórica de los lugares sigue siendo una variable importante en la consolidación de la nueva geometría territorial y social en las actuales circunstancias, lo que implica acercarse a las tendencias internas.

No solo existe una disputa entre el tiempo de vida y el tiempo-medida del capital, como lo plantea Negri. Es importante entender que la lógica capitalista, por más desterritorializada que se pretenda en la constitución de un espacio abstracto, homogéneo, neutral e inmóvil, un espacio "sano" para la valorización, el dominio y el mando, está sujeta a las resistencias localizadas, los tiempos y espacio-tiempos de las diversas manifestaciones, proyectos y procesos que no reducen su horizonte de vida a la lógica del valor de cambio. El desenvolvimiento de la relación social capitalista es la extensión y universalización socio-geo-histórica de la explotación, el dominio y el mando, pero al mismo tiempo, también, es expresión de múltiples discursos y prácticas localiza-



das de la socio-geo-historia, que nos permiten entender la globalización más allá de una historia lineal y unívoca⁵.

En las últimas décadas se impuso una reestructuración económica y una reforma político-institucional, en medio de la violencia política y los antagonismos sociales, que han transformado profundamente el panorama nacional. Los sectores y ramas productivas se han reorganizado; el Estado viene transformando su forma y funciones; viejos pactos y acuerdos elitistas se resquebrajan en el seno de las élites políticas y económicas –legales e ilegales– y el conflicto armado interno se prolonga financiado con los recursos provenientes del narcotráfico, mientras que los sectores sociales populares continúan sus luchas y buscan revalorizar sus prácticas en medio de una de las peores crisis humanitarias del hemisferio occidental: el desplazamiento forzado interno.

El paro cívico de septiembre de 1977 tiene una importancia estratégica para la comprensión de las tendencias internas de reestructuración económica y reforma político-institucional. El paro representa la movilización popular más importante de la segunda mitad del siglo XX. Logró la convergencia o apoyo de diversas luchas y actores sociales que venían expresándose con mucha fuerza en el panorama nacional –las luchas cívicas, campesinos, estudiantes, indígenas y amplios sectores medios empleados, amas de casa, pequeños comer-

⁵ “Con la historia –por lo que habría que leer ‘cambio tecnológico’–, la ‘globalización’ es vista como inevitable. Esto es, como la historia del progreso en la modernidad. Tiene la inexorable inevitabilidad de un gran relato. Y así, vuelve de nuevo, como en el discurso de la modernidad, imaginando las diferencias espaciales como temporales. ¿Partes del ‘sur’ del mundo no han entrado aún en la aldea global de las comunicaciones electrónicas? No hay que preocuparse, ellas lo harán pronto, en este sentido serán como nosotros. Una vez más, las diferencias espaciales son convertidas al signo de las secuencias temporales. Y una vez más, la potencial apertura del futuro es cerrada en un relato de inevitabilidad.

Esto no tiene solamente efectos conceptuales, también son políticos. Puesto que el impacto de entender las diferencias espaciales como un ‘verdadero’ problema, de ser avanzado o atrasado, conduce a negar la posibilidad que pueden existir historias alternativas. Esto, en efecto, hace parte del punto de vista político de mirar las cosas en esta vía [...] aún con la globalización hay diferentes trayectorias. Lo conceptual y lo político pueden, por lo tanto, ir juntos. Imaginar el espacio como producido de diferencias e interrelaciones permite el reconocimiento político y la posibilidad de trayectorias alternativas” (Massey, 1999: 284 y 285).



cientes—. Se propuso un pliego político unificado por las centrales obreras (un ejercicio que hasta ese momento había sido muy difícil de realizar), que recogió las demandas de amplios sectores subordinados. El paro paralizó durante varios días las actividades a lo largo y ancho de la geografía nacional, lo que implicó fuertes enfrentamientos con la fuerza pública y obligaron al Gobierno a abrir espacios de negociación. El Gobierno de López Michelsen (1974-1978) era el primero elegido por fuera del Frente Nacional, elegido por amplia mayoría. Es particularmente durante este Gobierno que se inicia una propuesta sistemática de desmonte del modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones.

El Gobierno propone la necesidad de llevar a cabo un proceso de reestructuración económica (hacer de Colombia el Japón latinoamericano), e inicia el reordenamiento institucional (reforma a la justicia, al orden territorial, propuestas de flexibilización laboral), aunque no logra realizar la llamada Pequeña Constituyente, para reformar la centenaria Constitución. De la misma manera, retoma las sugerencias de Ronald McKinnon, quien había hecho una asesoría para reformular la política económica y proponía que esta debería estar centrada en una reforma financiera. Es también durante el Gobierno de López que se presenta la primera bonanza marimbera, negocio transnacional que da origen a una nueva élite mafiosa y que, posteriormente, se consolida alrededor del tráfico ilegal de marihuana, cocaína y amapola. De esta forma, es posible vislumbrar, desde ese momento, ciertos rasgos propios del actual régimen político: la importancia que va adquirir el sector financiero, la necesidad de una reforma institucional que se adecúe a las nuevas tendencias del crecimiento económico y la aparición del principal actor económico, político y social —los traficantes de la droga—.

La crisis-reestructuración económica que se pone en marcha desde la década de los setenta se consolida con la apertura económica efectuada en el Gobierno de Gaviria (1990-1994). La desindustrialización, la *reprimarización* y la *financiarización* de la economía acompañaron el proceso de reestructuración económica en las últimas décadas⁶. La estructura industrial dejó de diversificarse

⁶ "Durante el periodo 1991- 2005, el sector agropecuario perdió participación en el PIB al caer de 22,3% a 13,4%, a su vez el sector manufacturero cayó de 21,1% a 14,7% en



hacia las ramas más complejas de la producción, como los bienes de intermedios y de capital. Por otro lado, en medio de la crisis del café (ruptura del pacto internacional del café en 1989), el sector de la construcción, algunas exportaciones no tradicionales (banano, flores, palma africana, azúcar), los ciclos de los cultivos ilícitos (marihuana, cocaína, amapola) y los ciclos de la economía extractiva minera y petrolera (carbón, níquel) han marcado la dinámica de la economía nacional en los últimos años, productos cuyos precios están sujetos a los vaivenes del mercado internacional y la tasa de cambio del dólar. En este panorama, el sector financiero se proyecta como el más importante al obtener las mayores tasas de crecimiento en las últimas décadas, imponiendo su lógica a todo el proceso de reestructuración económica y reforma político-institucional. El producto de la economía ilícita de la droga va a irrigar en una cuantía difícilmente establecida todo la economía nacional.

i) El alto peso de los sectores no transables en la economía colombiana cuya expansión está determinada por el crecimiento del mercado interno; ii) El poco peso del sector exportador, insuficiente para generar un activo proceso de acumulación de capital en el conjunto de la economía; iii) la baja productividad del sector exportador (salvo petróleo y carbón) que lo hace altamente dependiente de la tasa de cambio real [una ligera apreciación del peso saca del mercado gran parte del sector productivo]. En consecuencia, la revaluación del peso –punto central del modelo financiero aperturista– hace imposible una mayor profundización del sector productivo al comercio internacional; iv) El fraccionamiento en el bloque hegemónico que ha impedido que se erija una fracción dominante que logre consolidar un poder suficiente que le permita romper las alianzas de clase anteriores y v) la poca legitimidad del Estado frente a amplios sectores de la sociedad, que impide que este impulse con vehemencia un nuevo sistema de alianzas que

ese mismo lapso [...] El aumento en la participación del sector financiero en el PIB colombiano ha sido creciente y sostenido a partir de la apertura, del 18% al 22%, en el periodo 1993-2005 (en el año 2006, solo el sector bancario tuvo utilidades cercanas a los 4 billones de pesos, más de 100.000 millones de lo logrado en el año 2005)" (Libreros, Sarmiento, 2007: 31). Aunque se haya presentado una gran caída del sector agropecuario, sigue siendo el único que posee un "valor agregado" competitivo: nuestra dotación ambiental, como lo manifiesta abiertamente el actual Gobierno.



tenga como fundamento los nuevos sectores exportadores (Misas, 2002: 204 y 205).

La reforma constitucional de 1991 consolida los incipientes avances que se venían realizando para una transformación institucional, a la medida de las nuevas necesidades económicas. La nueva Constitución consagra elementos esenciales para apoyar el nuevo modelo de crecimiento económico: eleva a norma constitucional la apertura económica e integración regional (artículos 226 y 227); se propone la creación de zonas de libre comercio (artículo 333); el manejo monetario, pieza central de la propuesta neoliberal, se centraliza en cabeza del Banco de la República (artículos 371 y ss); se consagra la privatización (artículos 48, 336, 355 y 365) y se refuerzan las potestades presidenciales respecto de los Estados de excepción, la planeación económica y la decisión sobre el gasto público (artículo 189). También se propuso un mecanismo idóneo para la reorganización político-institucional, al otorgar al presidente facultades extraordinarias para suprimir, fusionar o reestructurar entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta (artículo 20 transitorio), con lo cual se abre la posibilidad de privatizar las pocas empresas industriales y comerciales del Estado y los servicios públicos.

Es así como las propuestas neoliberales impuestas a nuestros gobiernos, por vía de los préstamos asumidos con la banca multilateral –Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo–, se convierten en una realidad para el manejo de modelo de desarrollo y la política económica, que ven en el mercado el eje central de reorganización política, económica y social, direccionando una democracia cuya soberanía está en el mercado y se define por el plebiscito de los consumidores. Con el Gobierno de César Gaviria se retoma y profundiza el avance en el proceso de reestructuración económica y reforma política, intentado en Gobiernos anteriores –iniciadas desde López Michelsen–, en esta oportunidad tomando atenta nota de los dictados del Consenso de Washington⁷. Estas reformas desvalorizan la presen-

⁷ El llamado Consenso de Washington fue un acuerdo sobre los objetivos básicos y los principios que deberían guiar cualquier reforma política y económica en nustraregión, teniendo como presupuesto básico el libre mercado, como eje central del crecimiento económico: liberalización financiera y del comercio; un tipo de



cia del Estado y lo convierten en el "Estado del capital", o el "capitalista colectivo en idea", pues cada vez más ve subordinada su intervención al despliegue de la lógica del mercado y la fluidez del dinero, imponiendo los intereses de las élites financieras en asocio con una nueva élite terrateniente-mafiosa y subordinado a la inversión de las grandes empresas transnacionales.

El actual Gobierno consideró que si existía algún fracaso en la política neoliberal, era el resultado de su mala aplicación en anteriores gobiernos. Es así como se avanza en las reformas de segunda generación, o las reformas de la reforma, ya que la liberalización comercial, la estabilidad macroeconómica y la buena fijación de precios eran insuficientes. Se lograba una cierta estabilidad macroeconómica y el manejo de la inflación, pero no eran suficientes para lograr tasas más altas de crecimiento económico. La vía de su imposición a los Gobiernos fue la misma que se utilizó con el consenso, mediante las condiciones impuestas por la banca multilateral, en los recurrentes préstamos⁸.

cambio competitivo (que debe ser fijado por las libres fuerzas del mercado); promoción de la inversión extranjera directa como forma de suplir las necesidades de capital interno (reactivar la economía y contribuir a la diversificación de las exportaciones); la privatización de las empresas estatales para generar más recursos para el Estado y prevenir desembolsos posteriores (la empresa privada se considera mucho más eficiente); disciplina fiscal (supeditar el gasto público a las decisiones en política monetaria); recortes al gasto público, particularmente en los gastos de funcionamiento, para concentrarse en sectores desventajados; reforma tributaria para aumentar la base de recaudo y, por ende, de recursos para el Estado (incluye el aumento de los impuestos indirectos y la ampliación de la base tributaria); protección de los derechos de propiedad para generar un ambiente propicio para la inversión (desregulación, principal mecanismo para promover la competitividad de la economía, acabar con el control de precios, las barreras a las importaciones y las regulaciones laborales que desestiman la inversión y competitividad) (Williamson, 1993).

⁸ El mismo Williamson va a proponer algunos elementos para fortalecer las reformas ya iniciadas: altas tasas de ahorro como fuente para financiar el crecimiento económico; se deben apoyar aquellas áreas que contribuyan a elevar los rendimientos económicos –infraestructura, mayor distribución del ingreso– y se deben reducir las inversiones en áreas como la defensa, administración y subsidios; se reconoce la de la tributación por daños ambientales, para favorecer la productividad, la eficiencia y el cuidado del medio ambiente; se necesita una mayor supervisión del sector financiero para evitar las graves crisis financieras; tipos de cambio competitivos; se debe profundizar la liberalización del comercio con acuerdos bilaterales y multilaterales, regionales y hemisféricos; propugnar por una economía más compe-



La reforma constitucional declaró el Estado social de derecho descentralizado, reconoció el carácter multiétnico y pluricultural de nuestra sociedad, consagró una amplia carta de derechos (individuales, civiles, políticos, económicos, ambientales), dando una especial protección a los grupos más vulnerables, para buscar condiciones de igualdad real, y estableció una ampliación de los espacios de participación política y social. Se lograron algunos avances reales en materia de democracia participativa y reconocimiento de derechos, aunque fuera más evidente la eficacia simbólica, que fue bien capitalizada por los gobiernos de turno. Se llegó a una especie de "judicialización de la política", que contribuyó a oxigenar la legitimidad del régimen político mediante el activismo jurídico progresista de la Corte Constitucional, especialmente por la aplicación generalizada del derecho de tutela. Sin negar la importancia que esa "judicialización" de la vida política tuvo, es importante no olvidar que esa misma Corte guardó prudencial silencio o emitió fallos ligeros o confusos en materia de leyes, tratados de comercio y temas que tocan aspectos importantes para la vida ciudadana (Novoa, 2005).

Igualmente, los espacios de participación política y social consagrados en la nueva Constitución, cumplieron más con una eficacia simbólica que real. En realidad lo que buscaba la reforma era la participación despolitizada de un ciudadano ideal. Los diferentes espacios estaban definidos por una serie de formalismos para su elección, pues permitían una presencia y voz en espacios de control y veeduría, pero su papel no tenía ningún carácter decisorio o de incidencia real en la fiscalización de la actividad de la administración pública (Uribe, 2001). Hoy el unanimismo uribista, que posee una amplia bancada en la Cámara y el Senado, ha golpeado incesantemente los avances democráticos de la Constitución de 1991.

La reforma del Estado implicaba también la reorganización de los mecanismos necesarios para la represión y disciplinamiento social y político, indis-

titiva, libre de los poderes de mercado públicos y privados y desreglamentada, con vigilancia antimonopolios e incentivos a la eficiencia; garantía de los derechos de propiedad, estratégico para América Latina, y una distribución más equitativa de la propiedad rural como objetivo económico y social. Agrega como novedosa la idea del fortalecimiento institucional y la mejora en los procesos educativos, como factores estratégicos para lograr los objetivos de crecimiento económico y bienestar social (Williamson, 1998).



pensables para consolidar la nueva estrategia de crecimiento económico, en un ambiente en el que la protesta social y política se mantenía y el conflicto interno armado se complejizaba. Hacia finales de los años ochenta el régimen político atravesaba una profunda deslegitimación en el manejo del orden público, por el uso recurrente de los Estados de sitio para dictar normas altamente represivas, el juzgamiento de civiles por militares y la "guerra sucia", con la utilización por parte de los organismos de seguridad de prácticas abiertamente ilegales para reprimir la protesta social y política (tortura, desaparición forzada, asesinato).

El giro que se presentó implicaba el tránsito de la "guerra sucia" hacia la normalización de la excepción. Los ejércitos conformados por los capos de la droga se van a encargar de realizar el trabajo "sucio" con la acción u omisión de sectores de los aparatos de seguridad del Estado, y con la anuencia, y en algunos casos financiación, de élites políticas y económicas regionales y de sectores productivos nacionales e internacionales, convirtiendo el paramilitarismo en política de Estado⁹. Por otro lado, teniendo en cuenta que la Constitución del 91 hacía más difícil la promulgación del Estado de excepción, al sujetarlo a estrictos controles constitucionales, los Gobiernos tomaron el camino de consolidar como legislación corriente las normas excepcionales dictadas en años anteriores para la contención de las luchas sociales¹⁰. El estamento militar se fortaleció en el último periodo y ganó un mayor espacio al interior del Estado, contribuyendo así a la "militarización" del poder político, a pesar

⁹ Como lo declaró Mancuso, uno de los principales líderes paramilitares, en versión libre durante el proceso que se le sigue por la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (BBC, 2007).

¹⁰ "Tanto el desmonte de la justicia penal militar y el traslado de los delitos de su conocimiento a jueces especializados (decretos 1204 de 1987 entre otros), como la creación y organización de la jurisdicción de orden público (decretos 180, 181, 474 y 2490 de 1988, entre otros) tuvieron origen en el estado de sitio. Posteriormente, durante el Gobierno de César Gaviria, toda la política de sometimiento a la justicia —por medio de la cual se logró la entrega de la cúpula del Cartel de Medellín— se llevó a cabo mediante decretos de excepción (decretos 2372 y 3030 así como 303 y 1676 de 1991, 1833 y 1834 de 1992 y 264 de 1993). La gran mayoría de decretos legislativos expedidos entre 1984 y 1991, relativos a la justicia especializada, fueron convertidos en legislación permanente y actualmente constituyen lo esencial de la justicia penal colombiana" (García, 2001: 340).

de las constantes denuncias de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos sobre los vínculos directos o la ayuda que ciertos miembros de las fuerzas militares prestan a la labor del paramilitarismo.

En las últimas décadas hemos asistido al reforzamiento de uno de los actores más desestabilizadores y reaccionarios —los sectores vinculados al tráfico ilegal de drogas—, que desplegará toda su capacidad económica y política en campos y ciudades. Debido a su éxito económico, va a buscar incrustarse en el sistema oligárquico y exigir la cuota de poder correspondiente, llegando a desafiarlo militarmente, como ocurrió con la arremetida de Pablo Escobar, a finales de los años ochenta. Lo lucrativo del negocio conducirá a estos sectores al lavado de los dólares producto de sus actividades ilícitas irrigando todo el sistema económico: en las ciudades atiza la especulación inmobiliaria y permea múltiples ámbitos de la economía legal, y en el campo se convierte en dueño de las mejores tierras, lo cual contribuye a reforzar nuevamente la concentración de la propiedad y a acelerar el proceso de capitalización del agro, tanto por la vía legal, como por la extensión de los cultivos ilícitos. Con su poder económico lograron la constitución y desarrollo de ejércitos privados, grupos de autodefensa y paramilitares, que no se limitaron a la defensa de sus intereses sino que, además, se convirtieron en el brazo armado del orden oligárquico en contra de la insurgencia armada, los grupos de izquierda y los líderes populares.

Con la consolidación del negocio del tráfico ilegal de drogas en el país se crea una nueva élite que desde un comienzo se perfila como transnacional, por las características mismas del negocio. La producción, distribución y consumo implican necesariamente encadenamientos que solo pueden ser cubiertos por una lógica transnacional. De otra parte, los altos rendimientos logrados por los empresarios criollos exigen una reinversión que termina permeando por diversas vías el mercado nacional, para su valorización. La complejidad del negocio, unida a una serie de factores internos (pobreza, falta de legitimidad del régimen, una recurrente cultura de la ilegalidad, amplios territorios por fuera del interés de la intervención del Estado, posición geoestratégica del país, climas propicios, etc.) y externos (creciente demanda, no legalización), hace que asistamos a una lucha sin cuartel contra el tráfico de drogas, promovida y financiada con dineros norteamericanos, en donde se apresan sus cabecillas, se desmantelan las redes y carteles, pero seguidamente vemos surgir nuevamente y con mayor fuerza nuevas redes y organizaciones. En el entretanto se



ha consolidado toda una élite nacional, que ha ido legalizando sus actividades en términos económicos, políticos y sociales, en algunos casos manteniendo sus lazos originales con sus negocios ilegales. Desde los años ochenta estos grupos buscan una inclusión política en el sistema oligárquico y excluyente, dejando hondas huellas en los rasgos fundamentales del actual régimen político. Esta nueva élite consolida una

especie de "paraestado". Incluye una poderosa fracción capitalista; un aparato represivo militar; gastos de bienestar social; control territorial regional y un restringido pero eficaz apoyo popular. Es obvio que no es un "antiestado" o una subversión a las instituciones como en los momentos actuales podría llegarse a afirmar [...] los empresarios de la cocaína no solamente contribuían a la acumulación del capital en Colombia, y no sólo a la expansión de los negocios asociados a la cocaína, sino que también le contribuían al Estado a hacerle el trabajo que sus propias Fuerzas Armadas no habrían podido realizar (Rojas, Palacio, 1989: 97).

En los últimos lustros los traficantes de droga se convierten en los mayores propietarios de tierras en el país y desencadenan así, al mismo tiempo, lo que se ha denominado una "contrarreforma agraria", aplicando una estrategia de tierra arrasada y control territorial, con sus ejércitos apoyados por ciertos estamentos de las fuerzas militares y financiados por élites económicas y políticas, así como por grandes capitales transnacionales.

La consolidación territorial del nuevo modelo de desarrollo pasa necesariamente por el accionar de los grupos paramilitares y de autodefensa. La actual política del Gobierno Uribe tiene un referente importante en las estrategias de seguridad y desarrollo que implementaron estos grupos a lo largo y ancho de la geografía nacional, desde finales de los años ochenta. El modelo del Magdalena Medio se exportó posteriormente hacia otros rincones de la geografía nacional –Urabá, Meta, Costa Atlántica, Cauca, Valle, Chocó—¹¹. La política de

¹¹ "El Magdalena Medio es una región tradicionalmente afectada por la violencia, por la escasa presencia del Estado (limitada al terreno militar y policial) y la acumulación de conflictos no resueltos. Es un espacio físico de gran importancia en Colombia por la diversidad de intereses que allí confluyen de orden económico, político, social y militar. Además es estratégico para el desarrollo capitalista en Colombia y la expansión del Estado modernizante. En un inicio esta fue zona dominada por la guerrilla,



seguridad democrática del actual Gobierno es la consolidación de un modelo de neo-modernización altamente autoritario en lo político y profundamente retardatario en lo económico y social.

El clientelismo y la corrupción, dos de los males endémicos más importantes del régimen político colombiano, mutan en medio de la reestructuración. Las nuevas élites tecnocráticas, unguadas por un aura de total asepsia frente al juego de los políticos, rápidamente reconvierten el viejo esquema clientelista en un juego de "lobby", en el que se aplica la lógica de costo-beneficio, reeditando la corrupción por otros medios. Por otro lado, en el nivel territorial se desarrolló una especie de clientelismo armado en las zonas de influencia de guerrillas y paramilitares: los recursos públicos de las entidades territoriales del Estado van a parar al financiamiento de dichos grupos.

El actual Gobierno no escapa a la reedición de la corrupción, aunque una de sus banderas fuera enfrentarla abiertamente. El abultado déficit fiscal delata la política de los consejos comunitarios y el costo de sostener una bancada propia en el Congreso. Por otro lado, la legitimidad del régimen se encuentra en entredicho, puesto que la gran mayoría de los senadores y representantes investigados por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con los

alcanzando una gran influencia y respaldo de la población, pero debido a sus prácticas extendidas de vacuna y secuestros fue creando, poco a poco, el resentimiento contra su presencia. Los terratenientes de la región en unión con los cuerpos de seguridad del Estado, fortalecidos con la llegada de los narcotraficantes, lograron desalojar en buena parte del territorio a las agrupaciones de guerrillera, mediante el financiamiento, coordinación y dirección de los grupos paramilitares [...] Hoy en día, la región es prototipo de modelo de 'seguridad' y 'desarrollo'. Existe un control autoritario de la población, se han eliminado con violencia los disidentes y limitado todo intento de protesta social o política, se han realizado innovaciones tecnológicas, fundamentalmente en la actividad ganadera (tecnificación de establos e importación de reproductores de raza), se extendió el fluido de energía eléctrica, se ampliaron las redes viales y se construyó una importante estructura económica y social. Se ha perseguido y desplazado a los productores de económica campesina bajo el pretexto de eliminar la base de apoyo de la guerrilla, lo que en la práctica ha significado la imposición violenta de una contrarreforma agraria y la consolidación de un verdadero para-Estado, que tiene sus propios sistemas privados de seguridad, regulación económica, control político, cobro de impuestos, políticas sociales y procedimientos para dirimir conflictos" (Sarmiento, 1998: 58 y 59).



Mientras tanto el sector financiero adquiere un lugar de prevalencia en las cifras de composición del producto interno. La estrategia de apertura económica implicó un reacomodamiento profundo en las estrategias de los sectores económicos y en el interior mismo de cada uno de ellos (quiebras, fusiones, ampliación). El narcotráfico representa, como se ha señalado, un sector importante debido a su peso económico y su presencia territorial, lo que se traduce en la importancia política que adquiere en los últimos años, llegando a incrustarse territorialmente en la administración pública y, actualmente, cuenta con una alta presencia en la administración central. La indefinición o falta de hegemonía en el bloque de poder se traslada al trazado e implementación de las políticas públicas, aunque los dictados de esquema neoliberal logren imponerse pragmáticamente¹³.

La recomposición política y social de los sectores populares ha sido lenta y difícil en medio del recrudecimiento de la guerra, de las estrategias legales e ilegales del Estado para reprimirlos y de los efectos más perversos de la reestructuración económica. Frente a las desapariciones forzadas y las masacres practicadas por los actores armados, particularmente de los paramilitares, estos sectores terminan enfrentados a un triste dilema entre la muerte o el desplazamiento interno o externo.

La flexibilización laboral y la desindustrialización han dado cuenta en las ciudades de los sindicatos, sumadas al asesinato selectivo de sus principales

¹³ En el trazado de políticas públicas expresa esa indefinición del bloque de poder. "Mientras una parte de la administración trata de llevar a cabo políticas sectoriales (educación, salud, construcción de infraestructura, etc.) que conducen al cumplimiento de los compromisos institucionalizados y apoyan la acumulación de capital, otro sector de la administración, particularmente el equipo económico, propugna por políticas restrictivas de gasto público, demanda el recorte y la eliminación de programas. En suma, se trata de subordinar el orden político al orden económico, creando, de paso, altos niveles de ingobernabilidad, situación que da lugar a tensiones crecientes de una parte en el interior de la administración y los diferentes actores sociales. Unos reclaman por causa de las políticas restrictivas, demandando el cumplimiento de los compromisos, y otras mostrando su inconformidad por lo "modesto" de los recortes llevados a cabo, situación agravada por los formadores de la opinión pública económica, que en sus análisis y recomendaciones no logran, por lo regular, articular los problemas de corto con los de largo plazo ni sobrepasar la matriz teórico-ideológica del consenso de Washington, que les sirve de marco de referencia" (Misas, 2002: 204 y 205).



líderes. En los campos, las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes han tenido que enfrentar la arremetida paramilitar, el acoso guerrillero y los efectos devastadores de la apertura del agro a la competencia internacional, con un aumento en la concentración de la propiedad de la tierra¹⁴. Entre la tortura, el asesinato, la masacre, la falta de trabajo y el hambre, todos los grupos étnicos, raciales, sociales y políticos que se ubican en el campo encontraron en el desplazamiento interno la única salida al círculo mortífero *conflicto armado interno-consecuencias regresivas de la apertura económica*¹⁵.

Las demandas por la defensa de los derechos humanos y los movimientos por la paz (acuerdo humanitario, negociación política al conflicto armado interno) se instalan en las agendas de todos los actores sociales. Las luchas persisten, aunque fragmentadas, con una alta discontinuidad territorial y pocas posibilidades de convergencia, salvo por coyunturas particulares. Indígenas, afrodescendientes, campesinos y colonos siguen resistiendo en diversos rincones de la geografía nacional, con el apoyo de sectores ambientalistas y ciertos sectores de grupos comunales y comunitarios. En las ciudades, los grupos por opciones sexuales diferentes, las organizaciones de mujeres, algunos movimientos por la defensa de los propietarios de viviendas, estudiantes y jóvenes persisten en la lucha.

La política agraria en el Estado comunitario

La centralidad y definición que el Estado tuvo del espacio público-político nacional, en la dirección y planificación del crecimiento económico para la integración del mercado interno y como promotor del desarrollo y la seguridad

¹⁴ En relación con la concentración de la propiedad de la tierra, un informe realizado por IGAC-Corpoica en el 2002 revela que las fincas con más de quinientas hectáreas representaban 61% de la superficie predial y correspondían a 0,4% de los propietarios. En el año 1985, el 0,5% de propietarios controlaba 32,75% de la tierra, en comparación con el 61,25%, para 2001. Este mismo estudio afirma que las fincas de cinco hectáreas, para 1984, correspondían al 65,7% de propietarios y representaban el 5% de la superficie. En 2001, las fincas menores de tres hectáreas pertenecían al 57,3% de los propietarios y correspondían al 4,3% de la superficie (IGAC, Corpoica, 2002).

¹⁵ De acuerdo con las cifras de CODHES, hay alrededor de 3'800.000 desplazados en el país entre 1985 y 2005 (CODHES, 2006), registrando los mayores picos desde 1997 hasta la fecha.



social ha entrado en una profunda transformación. La soberanía consolidada alrededor del espacio nacional va cediendo espacio a las tendencias del proyecto globalista neoliberal, representado en el modelo de empresa cuya centralidad está en el mercado y la fluidez del dinero. La lógica de intervención de los Estados está profundamente supeditada a los intereses y expectativas de las organizaciones internacionales –Organización Mundial del Comercio, banca multilateral–, las grandes empresas transnacionales y los intereses de las élites económicas que poseen una mayor hegemonía en el nivel interno. La soberanía del dinero que no reconoce fronteras es la más acabada expresión de la socialización de la producción: un mundo sin mediaciones, reorganizado social y territorialmente alrededor de la jerarquía que impone la lógica desregulada del mercado (la lógica del mando en su estado natural). El proyecto de apertura económica, impuesto de manera sistemática desde el Gobierno de Gaviria (1990-1994), se aceleró, atado a las demandas impuestas por la banca prestamista multilateral (BM, FMI, BID), consagradas en el Consenso de Washington, y se renovó con la segunda generación de reformas, de la cual hace parte el actual Gobierno.

Por otro lado, la dinámica interna configura un régimen político altamente autoritario, centrado en la defensa de los intereses de una élite rentista y mafiosa y acérrimo defensor de los intereses del capital (las grandes transnacionales, así como los conglomerados internos), para captar la volátil inversión¹⁶. El conflicto armado que se recrudece a lo largo de los años noven-

¹⁶ En el actual plan nacional de desarrollo –PND– (p. 6) se sostiene claramente que el sector privado tiene un papel central en el crecimiento económico y que la generación de riqueza es fundamentalmente una responsabilidad del sector privado. De la misma manera, se concibe el Estado como un Estado subsidiario, puesto que para promover los intereses privados se acepta que deben ser coordinados por los mercados, aunque el Estado tenga una importante participación (ibíd.). De otro lado, el mismo PND (p. 9) considera que la política de seguridad democrática es una herramienta para generar confianza, inversión y crecimiento, medio para erradicar la pobreza. Solo en un contexto de seguridad democrática se puede dar el crecimiento económico, necesario para que crezcan el empleo, los ingresos laborales y, por lo tanto, aumenten los recursos para la política social. El neoinstitucionalismo ofrece un marco de referencia para esta propuesta: "Las instituciones jurídico-políticas son por tanto las que garantizan las condiciones que hacen posible el intercambio y valor de los derechos de propiedad. Deben entonces regular de manera clara los



ta es expresión de rigideces estructurales y, al mismo tiempo, se convierte en un mecanismo importante para la implantación del nuevo modelo de desarrollo en campos y ciudades. Si hay algo que caracteriza la neo-modernización autoritaria política y económica colombiana es su rasgo violento, reedición del proceso efectuado durante los años cincuenta del siglo XX, esta vez con la importante presencia de un grupo de las élites vinculado directa o indirectamente con el negocio transnacional del tráfico de drogas.

Aunque se presenten indefiniciones y desacuerdos en el trazado de políticas públicas, debido a las tensiones por la superposición de intereses, hay un acuerdo fundamental en el manejo monetario de las políticas públicas, necesario para el ajuste y la reestructuración macroeconómica y recetario para la reforma institucional. El manejo centralizado en el Banco de la República de la política monetaria, las permanentes reformas fiscales y tributarias y las privatizaciones como estrategias para la obtención de recursos con destino al financiamiento del crónico déficit fiscal se convierten en el núcleo duro para la definición de políticas públicas (Libreros, Sarmiento, 2007). Dado el continuo endeudamiento externo, dichas políticas seguirán manteniéndose debido a los condicionamientos de la banca multilateral para el acceso a recursos frescos, necesarios para el pago de los intereses de la misma deuda y realimentar el gasto público.

Los profundos desajustes que vive el agro colombiano son el resultado de un doble proceso: la apertura económica (iniciada con gran vigor durante el Gobierno de César Gaviria, que también planteó un reordenamiento institucional del sector, no terminado aún, que redefinió los objetivos de la política pública

derechos de propiedad, establecer y garantizar la libertad contractual y establecer un régimen de división y control mutuo entre los poderes públicos [...] instituciones determinan total o parcialmente la conducta de los individuos, en cuanto resultado de sus preferencias individuales y de las estructuras institucionales que limitan esa conducta" (Pritzl, 2000). Las instituciones inducen ciertos comportamientos porque excluyen o sancionan los actos socialmente indeseables e incentivan los que juzgan deseables. Puesto que las preferencias individuales de los agentes económicos tienden a ser estables y constantes "una conducta específica de los individuos se puede remitir a los incentivos institucionales existentes y, a la inversa, en presencia de ciertos alicientes institucionales también se puede predecir la tendencia de la conducta" (Burgos, 2002: 184).



acomodándose a un redireccionamiento del modelo de desarrollo), y, ahora, la centralidad que se le da a la promoción de exportaciones y la consideración del mercado como el mejor asignador de recursos¹⁷. Por otro lado, el campo se vio sometido al recrudecimiento del conflicto armado interno durante los años noventa, que impuso una lógica de tierra arrasada y control territorial, unido a la expansión de los cultivos ilícitos y las redes de narcotraficantes, en diferentes rincones de la geografía nacional.

En los últimos lustros los Gobiernos han impulsado las reformas de manera sistemática y con diferentes acentos, socavando la institucionalidad establecida y redireccionando en las políticas públicas el énfasis que se le debe dar al sector en el aumento de la productividad y la competitividad para enfrentar la internacionalización de la economía. Simultáneamente, se presenta un aumento de la presencia guerrillera y sus estrategias de financiamiento (el "boleto", la extorsión y el secuestro de los grandes terratenientes), fenómeno que al lado del aumento de propiedades rurales en manos del narcotráfico condujo a una intensificación del conflicto armado en el campo. El mismo conflicto fue consolidando una contrarreforma agraria, por la compra o apropiación por la fuerza de las mejores tierras, transformando sus usos, reduciendo las posibilidades de la economía campesina y afectando severamente la soberanía y la seguridad alimentarias del país¹⁸. Estos dos procesos se superponen simultá-

¹⁷ Las cifras de la balanza comercial entre 1991 y 1998 son bastante esclarecedoras. Se pasa de un superávit de 2.200 millones de dólares, en 1991, a un déficit de 3.900 millones de dólares, en 1998. En la relación importaciones-exportaciones de productos primarios se tiene que en 1991 se importaron 717.000 millones de dólares y se exportaron 4.882 millones (café, banano, flores, petróleo, carbón, ferrocromo y esmeraldas) y en 1998 se importaron 1.802 millones y se exportaron 6.796 millones. Las exportaciones agropecuarias cayeron entre 1990 y 1998 de 429 millones a 288 millones (Sánchez, 2002: 33 y 34). Las importaciones agropecuarias pasaron de 973.256 toneladas, en 1991, a 4'823.439, en 2004 (Machado, 2006: 3).

¹⁸ Este proceso de reorganización socio-territorial por medio de la violencia posee una geopolítica compleja. Allí se traslapan diversas lógicas, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura física (vías, puentes, hidroeléctricas, etc.), megaproyectos agropecuarios, mineros, petroleros, rutas del narcotráfico para entrar los insumos necesarios para la producción y para la exportación, corredores de seguridad y desplazamiento de guerrilleros y paramilitares, zonas estratégicas por su biodiversidad y fuentes de agua. En medio de esta geopolítica de la guerra, hay bastante claridad con respecto a las transformaciones en la propiedad de la tierra.



nea y dinámicamente, golpeando duramente la economía campesina y consolidando un proyecto de neo-modernización violenta en el campo, gracias a la desprotección creciente del productor nacional (aquel que no produzca para el mercado mundial o no corresponda a los estándares de competitividad y productividad), además de la concentración de la propiedad y cambio en los usos de la tierra, produciendo una disminución de la producción agropecuaria, desempleo y desplazamiento forzado para la inmensa mayoría de campesinos.

El modelo de apertura económica para el campo se llevó a cabo como una apertura de choque frente a la competencia internacional, el desmonte de los regímenes de protección a las exportaciones, la disminución de los aranceles para la importación de productos agropecuarios y, como puntal esencial del modelo, el apoyo e incentivos para la participación del sector privado. Se impone una creciente desprotección institucional, reducción y redireccionamiento de los apoyos y recursos a la producción campesina (asistencia técnica, financiamiento) y un especial énfasis en el apoyo a la agricultura comercial a gran escala. Este proceso requiere un reordenamiento institucional que se corresponda con los objetivos de desregulación de mercados e inserción en la economía internacional.

El sector agropecuario se ubica como cualquier otra actividad económica y debe afrontar las tendencias de la oferta y la demanda. Consecuente con este énfasis, la política pública se encamina particularmente a incentivar la inversión en el campo (nacional, pero preferentemente transnacional), en aquellos sectores más dinámicos, lo que tendrá un impacto directo en el empleo y, por lo tanto, en los ingresos de los campesinos, como la mejor solución a los problemas de pobreza:

"...la apropiación de tierras por parte de los narcotraficantes equivale a una gigantesca contrarreforma agraria [...] según cálculos del Incora, los narcotraficantes se han apropiado de casi 50% de las mejores tierras del país, mientras que cerca de 70% de los propietarios, en particular los pequeños campesinos, solo posee el 5% [...] el otro interés de los narcotraficantes ha sido la adquisición de tierras localizadas en las zonas de frontera agrícola, con el fin de desarrollar cultivos ilícitos e instalar laboratorios para su procesamiento [...] primero, la búsqueda de concentración, acumulación y generación de renta, mediante la inversión ilícita en tierras, especialmente fincas ganaderas, y segundo la provisión de tierras aptas y estratégicas para el cultivo y el procesamiento de la coca" (Flórez, 2002:10).



La política sigue el estímulo a los procesos de modernización productiva, bajo el modelo intensivo de capital, que combinado con el conflicto en el uso del suelo (una ganadería extensiva en tierras de uso agrícola) impide la ampliación dinámica de los mercados de trabajo en el sector rural, y por lo tanto la expansión del mercado interno y mejoramiento de la seguridad alimentaria.

El modelo de las políticas ha manejado la idea implícita de que los pequeños productores, o las economías campesinas, no compiten en el proceso de globalización, y por lo tanto no tiene sentido desde el punto de vista de la eficacia del gasto público, destinar recursos públicos para su sostenimiento y desarrollo (Machado, 2006: 4).

Se acabaron los precios de sustentación, se redujeron los aranceles de importación, se desmontaron las cuotas de productos agropecuarios y el Estado renunció a su función de apoyo a la comercialización. La reforma agraria se redujo a una política de subsidios para la adquisición de tierra; el crédito para los pequeños y medianos campesinos se viene privatizando, pues los campesinos se debieron adecuar a las tasas de interés del mercado; así como el apoyo tecnológico y la investigación para el desarrollo del campo se diluyeron.

La adecuación institucional, paulatinamente, busca reordenar la función pública a los nuevos derroteros aperturistas: desapareció el Idema (Instituto de Mercadeo Agropecuario) que estaba encargado de la compra de cosechas; las funciones de generación y transferencia de tecnología que tenía el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) –será Corpoica quien asuma esas funciones– desaparecen y se especializa en labores de regulación, prevención y control sanitario; se creó el Incoder como sustituto de otras entidades (INPA, Incora –Instituto Colombiano para la Reforma Agraria–, Fondo DRI e INAT, el cual continúa con el apoyo a las microempresas, las cadenas productivas y las alianzas productivas de los diferentes actores del campo, pequeños y grandes); las umatas entraron en crisis y se crearon los centros provinciales de gestión empresarial (CPGA), para atender las necesidades tecnológicas de las economías campesinas; la Caja Agraria desaparece para dar espacio al Banco Agrario y Finagro; y el Ministerio de Agricultura se concentró en aspectos de producción y competitividad, y descuidó totalmente una política de desarrollo rural. Perdió la visión global del sector para convertirse en una política de apoyo a productos específicos sobre la base de criterios de competitividad (Machado, 2006: 4 y 5).

El Gobierno de Uribe ha contribuido a la transformación institucional y ha aportado también a la redefinición de las políticas agrarias. Se consolida un



modelo de desarrollo empresarial para el campo, centrado particularmente en aquellos productos permanentes que tengan mejores posibilidades en el mercado mundial, sacrificando la soberanía y la seguridad alimentarias nacionales. Es clara en la propuesta la ampliación del espectro de interés de ese desarrollo empresarial, al vincular la dotación ambiental como una mercancía (bosques, aguas, biodiversidad), que tiene que ser explotada y puesta en el mercado. El grueso de las políticas para la defensa del campo es trazado por la Junta del Banco de la República, que maneja el flujo de dinero en la economía. Así se maneja la caída de la tasa de cambio y las tasas de interés para controlar la inflación. El Ministerio de Agricultura se limita a dibujar unos lineamientos mínimos o generales de política. Igualmente, el modelo de seguridad no hace ningún esfuerzo por ocultar la legalización de tierras producto de la contrarreforma agraria ocurrida en los últimos años, por medio de la estrategia de arrasamiento y control territorial del paramilitarismo.

La concepción de la nueva ruralidad pasa por establecer una relación directa entre lo local y lo global, mediada por el mercado (mundial especialmente), con un olvido de las dinámicas internas, de las poblaciones localizadas y sus trayectorias de modernización y cohesión social y producción de sentido, y de los aportes que hacen a la base alimenticia del país. La visión del desarrollo rural se transforma por una concepción del desarrollo empresarial del campo, independientemente del costo social y del ambiental. Jesús Antonio Bejarano, a la postre como director de la SAC, ya lo había previsto.

Se acentúa la desagrarización desde la perspectiva de las personas empleadas, se consolida la empresa agraria que supone sustituir la imagen de la tierra como patrimonio por la tierra como capital que debe valorizarse, se acrecienta la dependencia de la actividad económica agrícola de las empresas industriales y de distribución, se acentúa la especialización territorial en función de la existencia de ventajas competitivas, y, en fin, el mundo rural y las actividades agrarias se disocian de forma creciente (Bejarano, 1998: 12).

No solamente se disloca la relación entre lo rural y lo urbano; ahora lo rural abarca toda la dotación ambiental, los "servicios ambientales", que ahora también deben ser incluidos en la mercantilización del agro. Las apuestas del actual Gobierno refuerzan esa dirección que se le traza al campo colombiano: el apoyo a la producción empresarial para el mercado internacional, particularmente los cultivos de exportación, para que, ojalá, sean permanentes; el apoyo y la vinculación a la producción de biocombustibles; la tozudez en la apro-



bación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, sin tener en cuenta las desigualdades en la base productiva –tecnología, subsidios–, propuestas todas que atentan directamente contra los pequeños y medianos productores y ponen en peligro la soberanía y la seguridad alimentarias del país. La estrategia del presente Gobierno, con mayorías en Senado y Cámara, se ha hecho por las reformas legales. Allí se han logrado los encadenamientos necesarios para reforzar el proyecto de apertura rural como proyecto empresarial, en el Estatuto de Desarrollo Rural, el proyecto de ley de aguas, la Ley de Páramos y la fallida ley forestal.

La neo-modernización violenta del campo no solo se reduce a lo anotado sobre la vía violenta y directa sobre las poblaciones, también es necesario considerar la creciente socialización de la producción, que igualmente tiene sus rasgos de violencia. La concentración de la propiedad de la tierra y cambios en los usos del suelo, producto en parte del lavado de activos del narcotráfico, han generado una creciente salarización de la producción en el campo, pero una salarización restringida y autoritaria, una especie de tercerización de la economía, que refuerza el proceso de desplazamiento de las poblaciones campesinas, pues las posibilidades de empleo se han reducido¹⁹. No hemos salido del círculo mortal de la modernización del campo impuesta desde el siglo XIX, migración, colonización, despojo.

En dos aspectos coinciden los demógrafos: de un lado, la continua movilidad poblacional como rasgo histórico y sus relaciones con las condiciones de desarrollo desigual del territorio colombiano y en particular con los conflictos que han afectado a nuestra sociedad (Fajardo, sf: 23).

¹⁹ Es importante tener en cuenta los cambios de usos del suelo, pues la mayor concentración de la propiedad de la tierra implica que se reduzca su uso agrario y se dedique a la ganadería extensiva. Por otro lado, los usos agrícolas son intensivos en capital y no proporcionan mucho trabajo. De acuerdo con datos del DANE (Encuesta Nacional Agropecuaria), se considera que hubo una reducción en el área sembrada, entre 1990 y 2004, de unas 925.600 hectáreas. En relación con los usos del suelo, el porcentaje que ha sido utilizado en la agricultura es de 7,37%, mientras que en la ganadería se utiliza 74,4%. El uso potencial establecido para la agricultura es de 18'294.000 hectáreas y se utilizan solo 3'850.000, y para la ganadería tienen vocación unas 15'319.000 hectáreas y se utilizan 37'871.188. (DANE, 2002).



El problema de concentración de la propiedad de la tierra, que se encuentra en el centro del desplazamiento, y las posibilidades de avanzar en un proceso que dinamice el campo, de manera incluyente y justa socialmente y que tenga una viabilidad y sostenibilidad ambiental, naufragan frente a las propuestas gubernamentales. Aunque los subsidios a la compra de tierras han demostrado ser un fracaso, el actual Gobierno insiste en sostenerlos. Se ha llegado a manifestar que la extinción de dominio de tierras adquiridas ilegalmente por el narcotráfico es una alternativa a la redistribución de tierras, sin embargo, los resultados han sido precarios. El caso de la finca Carimagua es solo un ejemplo. La joya de la corona se encuentra nuevamente en los actuales desarrollos legislativos, que enlazan la desmovilización de los grupos paramilitares –Ley de Justicia y Paz– con la legalización de las tierras, que busca permitir la legalización del despojo practicado por aquellos que usurparon tierras.

Los programas propuestos de apoyo al pequeño y mediano productor también han impuesto su sesgo productivista y competitivo empresarial o se manifiestan como paliativos paternalistas, con muy poca incidencia en el desarrollo social y productivo del campo: el acceso al crédito es cada vez más difícil, solo 10% de los pequeños productores acceden al crédito formal y no hay un sistema que democratice el acceso a dichos recursos (Machado, 2006: 3); la asesoría técnica y el desarrollo científico, necesarios para el avance del sector, privilegia la inversión para el apoyo al sector externo, como la consagra el documento Conpes 3316, que autoriza a la nación para contratar un empréstito por 30 millones de dólares para financiar el proyecto de apoyo a la transición de la agricultura y el medio rural²⁰; el apoyo a las cadenas productivas privilegia ciertos productos, vinculados más con el mercado externo tales como cultivos de rendimiento tardío, frutas, hortalizas, forestales, tabaco, algodón y papa amarilla, además de los cárnicos bovinos y lácteos, acuicultura, cafés especiales, caña de azúcar, flores, plátano y banano, y biocombustibles (PND, 2006: 350).

²⁰ "Con el objeto de aprovechar las oportunidades de la apertura comercial, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha propuesto a la Banca Multilateral concentrar esfuerzos en la provisión de bienes científicos y tecnológicos para la agricultura y el aumento de la admisibilidad de los productos en mercados externos mediante la optimización de sus condiciones sanitarias de inocuidad" (documento Conpes 3316, 2004: 4).



El Gobierno nacional fortaleció varias acciones relacionadas con el sector, que se ejecutan por fuera del Ministerio, especialmente en la Consejería de Acción Social, como el programa RESA (promoción del autoconsumo), familias guardabosques, microcadenas productivas, agricultura urbana, y mantuvo la erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigación y destrucción manual. Estas acciones representan de alguna manera un proceso de de-institucionalización (Machado, 2006: 7).

Protesta con propuesta

Frente a este panorama, los sectores sociales populares han caminado por diversas vías, basados particularmente en trabajos que demuestran la importancia que tiene hoy la economía campesina como abastecedora de la mayor parte de alimentos perecederos que entran diariamente a una ciudad como Bogotá (Forero, 2002. Rodríguez, 2004). Ello implica que proteger las economías campesinas y los circuitos regionales y locales de mercado está directamente relacionado con la posibilidad real de asegurar la comida en cantidad, calidad y variedad nutricional adecuada para la población colombiana. No solamente se trata de proteger y construir una vida digna para las familias campesinas, sino también entender que de ellas depende, en gran medida, la posibilidad de existencia de los pobladores urbanos, y al contrario.

De esta forma el tema alimentario empieza a ser construido por los sectores populares con un presupuesto distinto a la lógica del Gobierno de Uribe Vélez y, en últimas, a las propuestas políticas que han surgido en el mundo desde los años setenta, que buscan reorganizar la producción agrícola en torno al rendimiento y la eficiencia o a reconstruir, bajo los mismos supuestos, los sistemas de abastecimiento del mundo en todas las escalas, con la premisa de solucionar el agobiante problema del hambre en los países llamados "en vías de desarrollo".

A diferencia de las políticas del Gobierno que deslindan el tema de la seguridad alimentaria del de desarrollo rural, pretendiendo que las primeras son asunto de consumidores y las segundas de productores, las organizaciones campesinas, comunales y de sectores populares de las grandes ciudades del país han empezado a confluír en propuestas que permiten ver que el problema alimentario articula espacial y temporalmente el campo y la ciudad (Organizaciones campesinas y comunales, 2006).



En esta perspectiva, las decisiones que se tomen con respecto a las familias campesinas afectan la posibilidad de alimentarse dignamente. Es decir, que las formas de producción campesina garantizan no solo la inocuidad química de alimentos, puesto que estos no tienen que viajar largas distancias en condiciones de preservación cada vez menos naturales, sino la diversidad de los mismos y su aceptación cultural basada en las dietas regionales e identidades culturales construidas. Por otro lado, se empieza a reconocer también que las decisiones que se toman con respecto al habitante urbano inciden en la posibilidad de que los productores continúen articulados a los mercados locales, regionales y nacionales, que son mucho más seguros y estables que los internacionales, sin que ello signifique que estos otros no puedan existir.

En esta lógica, frente a la propuesta de muchas organizaciones internacionales y la política institucional del Gobierno de construir políticas públicas regionales y nacionales de seguridad alimentaria, organizaciones populares de diversa índole han recalcado que la única forma de asegurar la alimentación para toda la población colombiana, y en especial para sus sectores más marginados y vulnerables, solo puede ser posible con políticas integrales que piensen el fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento alimentario existentes y su adecuada regulación, impidiendo así el control de los mismos por parte de monopolios que pudieran poner en riesgo, a favor de la especulación, el derecho a una alimentación digna y adecuada nutricionalmente de todas y todos los colombianos.

Es por ello que en todos los debates de las organizaciones populares está propuesto el tema alimentario como un asunto no solo de Seguridad sino también de Soberanía, vista como la posibilidad por parte de los Estados, las regiones y las comunidades locales de decidir, qué, cómo y dónde se consumen y se producen los alimentos. Sin embargo, muchas organizaciones y procesos locales empiezan ya a proponer que las soluciones al problema alimentario son también un asunto de Autonomía, es decir de control real de las decisiones tomadas sobre el ciclo alimentario; por lo tanto esta propuesta supone asumir el debate sobre una posibilidad verdaderamente democrática del control de los elementos fundamentales de este ciclo, como son por ejemplo las semillas.

En cuanto se refiere a la construcción de *lo político*, frente al tema alimentario es evidente la fuerte presencia de las mujeres en todos los escenarios de discusión en el país. Esto no solamente se relaciona con el hecho evidente de que son ellas en quienes descansa hoy en día la responsabilidad de



los puntos más vulnerables del ciclo alimentario. La producción menos rentable del campo ha obligado a que los hombres abandonen el campo en busca de mejores jornales en la ciudad, en otras tierras o en la guerra. La alimentación, como otros aspectos del cuidado de la familia –invisible en términos laborales– sigue estando en cabeza de las mujeres, que doblan o triplican sus jornadas laborales en campos y ciudades. Esta fuerza de la mujer no solo se evidencia, digo, en su presencia física en reuniones y debates; se hace evidente también en la forma en la cual proponen los cambios y transformaciones desde adentro hacia fuera, desde los mundos privados a las transformaciones públicas, desde la huerta y la cocina a los vecinos, la comunidad y la región, en un acto que, por el hecho de ser político, no puede ser distinto al de engendrar la vida. En palabras de las mujeres de la costa, al referirse a la lucha por mantener los huertos de sus casas y cocinar para sus familias lo en ellos han cosechado, “preñando la tierra, combatimos el hambre”.

En esta medida se construye también una mirada distinta sobre los recursos naturales; No en vano la mayoría de las organizaciones campesinas y de los procesos locales, que estas y otras organizaciones no gubernamentales apoyan, parten de la propuesta de transformar las prácticas agrícolas de manejo del campo. Construir autonomía en las zonas rurales significa reconstruir balances entre el hombre y la naturaleza que le permitan depender cada vez menos de agentes externos. Ello no significa que se ignore que muchas familias campesinas trabajan hoy en día con insumos químicos y técnicas que presionan y afectan los recursos naturales, pero existe una clara posición frente a los daños ambientales, es decir sociales y ecosistémicos, que estos insumos causan y se ha puesto de presente la búsqueda por transformar esta situación, con el apoyo a propuestas de “producción limpia”²¹.

Una última diferencia está en la propuesta de las organizaciones sociales y, en particular, de las comunidades organizadas, no solo étnicas sino también

²¹ Dice cita textual del Mandato Agrario producido en el Congreso nacional agrario del 7 de abril de 2003: “Se dará prioridad por parte del Estado y de la sociedad en general a los procesos productivos orgánicos y de transformación en materias primas que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales, la defensa del ambiente y de la biodiversidad, en virtud de que están fuertemente relacionados con la soberanía y la seguridad alimentaria” (Mandato Agrario, 2004: 14 y 15).



rurales campesinas y urbanas, frente al manejo público o privado de los recursos naturales. Escrito en 1932, el artículo de Garret Hardin se refiere al manejo de los recursos comunes como una "tragedia", su texto fue más conocido como base teórica de sustento para la privatización de los recursos naturales que como un debate a la ciencia y la tecnología y como solución exclusiva de los conflictos ambientales, que es como introduce su texto (Hardin: 1935). Sin embargo, fue la privatización de los recursos naturales, como el camino adecuado para la preservación de los mismos, la que hoy en día se esgrime como política pública en un Estado como el nuestro y que tiene un reflejo claro en propuestas de ley como la de regulación de recursos hídricos, más conocida como la ley de aguas, y la fallida ley forestal.

Lo que han mostrado en este debate numerosas comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y urbanas es que el manejo común de los recursos naturales implica la construcción de un consenso y un control colectivo para adecuado uso de los mismos. Es decir, que la administración colectiva de los recursos naturales no solo genera ventajas para las comunidades, que en calidad de usuarias pueden consensuar el valor económico, reducir las tarifas y garantizar así el acceso a recursos que, como el agua, hacen parte de las necesidades básicas insustituibles para la existencia de la vida misma, sino que también significa construir la posibilidad de mantener escalas de manejos sociales que permitan un mejor uso de los recursos, y de normas comunes, que construidas para la gestión de los recursos naturales, desde y para las comunidades, acerquen la mirada y propicien la responsabilidad sobre ellos.

Así como la agricultura urbana le permite a los niños de los barrios populares pensar la relación que existe entre el plato de comida que tienen diariamente en frente y la gente que hace posible que estos estén allí y no que vienen del refrigerador o de la tienda, propuestas de manejo colectivo del espacio, como la de los territorios indígenas, las tierras colectivas o los acueductos comunitarios que aún existen en el campo y la ciudad, también le permiten a una comunidad pensar qué relación existe entre las quebradas, el verano, el invierno y el agua que sale de la llave, o que los bosques que la rodean son mucho más que artículos para vender en el mercado.



Bibliografía

- BBC mundo.com. En: <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latinamerica/newsid6660000/6660281.stm>, 15 de mayo de 2007.
- Bejarano, Jesús Antonio. 1998. El concepto de lo rural: ¿Qué hay de nuevo? En: *Revista Nacional de Agricultura*. Bogotá, (912-913).
- Burgos, Germán. 2002. Derecho y desarrollo económico, de la teoría de la modernización a la nueva economía institucional, en *Revista de Economía Institucional*.
- Cleaver, Harry. 1982. Technology as Political Weaponry. En: <http://eco.ubtexas.edu/~hmcleaver/hmctechaweaponry.htm>.
- CODHES. 2006. Cifras de desplazamiento. En: <http://www.codhes.org/info/grafico-tendencias.html>.
- DANE. 2002. Encuesta Nacional Agropecuaria.
- Documento Conpes 3316, del 29 de noviembre de 2004. En: www.dnp.gov.co.
- Fajardo, Darío. Desplazamientos forzados en el desarrollo de la agricultura comercial colombiana. En: *IV Jornadas Abiertas. Tierra y desplazamiento en Colombia. Crisis humanitaria por el control del territorio*. Bogotá.
- Flórez, Luis Bernardo. 2002. Extinción de dominio, reforma agraria, democracia y paz. En: *Revista Economía Colombiana*. (309).
- Forero Álvarez, Jaime. 2002. La economía campesina en Colombia 1990-2001. En: *Cuadernos Tierra y Justicia*. ILSA. Bogotá, (2).
- García, Mauricio. 2001. Normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997. En: García, Mauricio y Sousa Santos, Boaventura de. *El calidoscopio de las justicias en Colombia*. Colciencias, ICANH, Universidad de Coimbra-CES, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Siglo del Hombre Editores. Bogotá, I.
- Garret, Hardin. 1995. La tragedia de los comunes (traducción de Horacio Bonfil Sánchez). En: *Gaceta Ecológica*. Instituto Nacional de Ecología. México, (37). Consultado en: <http://www.ine.gob.mx/>.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica). *Zonificación de los conflictos de uso de la tierra en Colombia*. Bogotá. 2002.



- Libreros, Daniel y Sarmiento, Libardo. 2007. La hegemonía de la oligarquía financiera-terrateniente. En: Revista CEPA. Febrero, (2).
- Machado, Absalón. 2006. Enunciados para una política agraria. En: *Propuestas de políticas públicas*. Fescol. Bogotá, (3).
- Mandato Agrario. 2004. En: *Políticas agrarias para Colombia*. ILSA. Bogotá.
- Marazzi, Christian. Money in the World Crisis: New Basis of Capitalist Power. En: Bonefeld, Werner y Holloway, John (ed.). 1996. *Global Capital, Nation State and the Politics of Money*. Macmillan Press Limited. Great Britain.
- Negri, Toni. 2002. *Crisis de la política. Escritos sobre Marx, Keynes, las crisis capitalistas y las nuevas subjetividades*. Ediciones El cielo por asalto. Argentina.
- Negri, Antonio. 1978. *La clase ouvrière contra l'Etat*. Editions Galilée. Paris.
- Novoa, Édgar. Reestructuración, campos jurídicos y Corte Constitucional". En Estrada, Jairo (ed.). 2005. *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina*. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencia Política, Convenio Andrés Bello, Colciencias. Bogotá.
- O'Connor, James. 1987. *The Meaning of Crisis. A Theoretical Introduction*. Basil Blackwell. New York.
- Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Hacia un Estado comunitario: desarrollo para todos. En: www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/54/Default.aspx.
- Organizaciones Campesinas y Comunales. 2006. Lineamientos estratégicos para una política pública agroalimentaria para Bogotá y comentarios al Plan Maestro de Abastecimientos propuesto para la ciudad, expresados por organizaciones campesinas y comunales. En: *Bogotá: autonomía agroalimentaria, diálogos y controversias*. Proyecto Planeta Paz. Bogotá.
- Rodríguez Muñoz, Bladimir. 2004. De la huella ecológica al control territorial mediado por el abasto de alimentos de Bogotá (1970-2002). Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Geografía. Bogotá.
- Rojas, Fernando y Palacio, Germán. Empresarios de la cocaína, parainstitucionalidad y flexibilidad del régimen político colombiano. Narcotráfico y contrainsurgencia en Colombia". En Palacio, Germán (comp.). 1989. *La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana*. Cerec. Bogotá.

- Sánchez, Jairo. 2002. La crisis estructural y el sector rural. En: *Cuadernos Tierra y Justicia*. ILSA. Ediciones Antropos. Bogotá.
- Sarmiento, Libardo. 1998. El Magdalena Medio, modelo piloto de capitalismo y modernización autoritaria en Colombia. En: *Revista Apuntes del Cenes*. Tunja, (26).
- Tickner, Arlene. 2006. La política internacional del Gobierno de Uribe. En: *Cuadernos de Ciencia Política 4. La cultura política en tiempos de Uribe*. Grupo de Investigación Cultura Política, Instituciones y Globalización, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Unijus, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, año 3, octubre, (4).
- Uribe, María Teresa. 2001. Las promesas incumplidas de la democracia participativa. En: Varios autores. 1991-2001. *Seminario de evaluación. Diez años de la Constitución colombiana*. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. ILSA. Bogotá.
- Williamson, John. Revisión del Consenso de Washington. Emmerij, Louis y Núñez del Arco, José (comp.). 1998. *El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI*. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.
- Williamson, John. 1993. Democracy and the 'Washington Consensus'. En: *World Development*. 21 (8).